INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY SOBRE ACOSO SEXUAL EN ÁMBITO ACADÉMICO. BOLETINES NÚMEROS 11.750-04, 11.797-04 Y 11.845-04.

1. En el inciso segundo del artículo 1º del proyecto, reemplácese la expresión *“medidas que sean necesarias para erradicar el acoso sexual y toda forma de violencia contra las mujeres”* por lo siguiente: *“medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar el acoso sexual y toda forma de violencia en contra de las personas que se desenvuelvan en el ámbito académico, cualquiera que sea su orientación o identidad sexual”*.

Fundamentos

El artículo 1º del proyecto propone establecer que es un deber de todas las instituciones de educación, de todos los niveles formativos, el adoptar activamente aquellas medidas que sean necesarias para erradicar el acoso sexual y toda forma de violencia contra las mujeres, debiendo promover el buen trato y relaciones igualitarias de género. Como primera consideración, corresponde no sólo exigir medidas para erradicar el fenómeno del acoso sexual y toda forma de violencia al interior de la comunidad educativa, sino que además es necesario que se establezcan e implementen medidas para prevenir dichas conductas, asunto sobre el cual la norma del proyecto no hace mención en la disposición citada, lo cual pretende ser corregido a través de esta indicación.

Por otra parte, si bien históricamente en la inmensa mayoría de los casos son mujeres quienes han sido víctimas de acoso sexual por parte de hombres que están en una posición de poder en relación a ellas, lo que sin duda se extiende al ámbito académico, se debe reconocer la posibilidad que tales atentados a la dignidad de las personas se pueden concretar mas allá de esa hipótesis. Es así como las conductas de acoso sexual no se limitan al clásico y mayoritario esquema de “hombre en posición de poder” sobre “mujer sometida a su esfera de influencia”, sino que perfectamente se pueden dar casos de mujeres que cometan tales conductas en contra de un hombre o de otra mujer, lo mismo que de un

hombre sobre otra persona de su mismo género. Es más, limitar la nomenclatura que utiliza el proyecto sólo a un esquema binario de sexo “hombre – mujer” tampoco da cuenta de una realidad que se expone de manera cada vez más abierta, conforme evoluciona nuestra sociedad, respecto de quienes no obstante tienen un determinado sexo biológico, sostienen una orientación o identidad sexual diversa. En el contexto ya señalado, resulta necesario que las normas que se dicten en materia de acoso sexual en el espacio académico sean redactadas de una manera suficientemente amplias, para abarcar de manera clara todas las referidas hipótesis.

2. En el artículo 2º del proyecto, reemplácese su inciso primero por el siguiente: *“Comete acoso sexual en el ámbito académico quien valiéndose o con ocasión de un vínculo académico y/o de investigación, requiera de cualquier forma una conducta de naturaleza sexual, sea para sí, sea para una tercera persona; o realice actuaciones no consentidas de connotación sexual, verbales o físicas, las cuales puedan provocar en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, sea que se traten de conductas aisladas, reiteradas o habituales”.*

Fundamento.

El artículo 2º del proyecto señala que comete acoso sexual en el ámbito académico quien valiéndose o con ocasión de un vínculo académico y/o de investigación, solicite -o realice solicitudes- de favores de naturaleza sexual, sea para sí, sea para una tercera persona, o presente un comportamiento no consentido de connotación sexual con tal que provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, sea que se trate de conductas aisladas, sea que se trate de conductas reiteradas o habituales. El concepto entregado por el proyecto tiene varios cuestionamientos, que pueden afectar la debida aplicación de la norma en términos de impedir realizar plenamente los objetivos planteados por esta iniciativa legal. En primer lugar, se

castiga a quien *“solicite -o realice solicitudes - de favores de naturaleza sexual”*, noción que es confusa en términos de restringir indebidamente los supuestos fácticos de aplicación de la norma. El acoso sexual va más allá de que una persona solicite o requiera de otro la realización de un *“favor sexual”* (denominación que desde ya resulta poco precisa y adecuada), ya que se puede concretar a partir de solicitarle a otro un acto de menor entidad, a la cual la víctima se verá conminada a acceder producto del vínculo de poder que sostiene el agresor en relación a ella, pretendiendo evitar una represalia que pueda afectar su normal desempeño académico. En este sentido, no es relevante que lo requerido sea tener algún tipo de contacto sexual o, por ejemplo, sólo se pide mostrar una parte del cuerpo, sino que lo importante y objeto de reproche es el uso indebido de la posición de poder en el ámbito académico para lograr que la víctima realice cualquier acto de connotación sexual, no importante su trascendencia material-objetiva. Lo determinante, insisto, es el abuso indebido de una posición de poder.

Por otra parte, el proyecto establece un estándar complejo de probar para la segunda hipótesis de acoso sexual en el ámbito académico que contempla, ya que exige que el *“comportamiento no consentido de connotación sexual”* haya provocado efectivamente en la víctima *“una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”*. El problema será que la víctima pruebe que materialmente sufrió dicho efecto a partir de la conducta indebida del autor de la conducta constitutiva de acoso, lo que no sólo enfrentará a la víctima a una victimización secundaria más intensa, al tener que someterse a una prueba de mayor entidad para tenerlo por establecido en conformidad a la ley, sino que además hará más difícil su acreditación, sobre la base de un elemento que desatiende el objeto del reproche, el cual debe ser el abuso de poder de quien tiene una relación de autoridad o superioridad en relación a la víctima dentro del ámbito académico. De esta forma, lo importante no es si la conducta ilícita provocó materialmente el perjuicio que se señala, sino que lo relevante desde ese punto de vista es si la actuación indebida fue capaz, por su naturaleza y características, de provocar una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante para la víctima.

3. En el inciso segundo del artículo 2º del proyecto, reemplácese la expresión ***“Se entenderá que existe vínculo académico en relaciones tales como la que hay entre”***, por lo siguiente: ***“Para efectos de esta ley, se entiende que existe un vínculo académico entre quienes dentro de una comunidad educacional ejercen una posición de poder en dicho ámbito y las personas que están sujetos a aquél, como sucede en las relaciones que existen entre”***.

Fundamento.

El proyecto de ley establece en el inciso segundo de su artículo 2º que se entenderá que existe vínculo académico en relaciones tales como la que hay entre tesista y guía, o entre estudiante y profesor/a, estudiante de escuela matriz y el respectivo/a superior/a, o entre estudiante en práctica y supervisor/a, compañeros de carrera o Universidad, ayudantes de cátedra, entre otros, cualquiera sea la nomenclatura que utilice la institución de educación, y cualquiera sea el lugar donde habitualmente se desempeñe el agresor, o la calidad jurídica del vínculo que éste o la víctima tengan con la institución de educación. Como se puede apreciar, la norma establece un catálogo más bien cerrado de casos donde se da la relación que sirve de supuesto para determinar el ámbito donde se pueden cometer las conductas que se buscan sancionar. Sin embargo, resulta más conveniente para una mejor regulación el establecer un concepto más general en esta materia, aclarando de manera explícita que los casos a los que alude la norma son a título de simples ejemplos y que obviamente no se trata de un catálogo cerrado de relaciones en cuyo contexto se pueden dar actos de acoso sexual en el ámbito académico.

4. Reemplácese la letra c) del artículo 3º del proyecto, por el siguiente: ***“c) Procedimientos que permitan la denuncia privada y segura por acoso sexual, en términos de resguardar debidamente la privacidad e integridad de quien***

la realice; y de persecución eficaz de responsabilidades pecuniarias en contra de quienes incumplan el sistema de prevención”.

Fundamento.

El proyecto establece que Universidades, Centros Formación Técnica o Institutos profesionales, Escuelas Matrices o de formación de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública deberán contar con un modelo de prevención y de sanción de acoso sexual en el ámbito académico construido con la participación de todos los estamentos con conformación paritaria, el que deberá contemplar entre otros puntos *“Procedimientos de denuncia de acoso sexual y de persecución de responsabilidades pecuniarias en contra de las personas que incumplan el sistema de prevención”*. Uno de los principales problemas que se pueden identificar en materia de acoso sexual, según lo aportado en los antecedentes que fueron expuestos durante la discusión en general del proyecto, se vincula precisamente con las dificultades para que las víctimas puedan realizar denuncias. Es así como se sostiene que en el ámbito académico, el acoso sexual constituye una situación de alta incidencia pero de muy baja denuncia, lo que resulta explicable, por el temor de la víctima a recibir algún tipo de represalia por parte de quien ejerció sobre ella la actuación indebida, y la desconfianza que puede tener respecto de una eventual reacción corporativa que no sólo impida que el acoso se repita, sino que derechamente genere un mayor perjuicio, más allá de los evidentes fenómenos relacionados a la victimización secundaria. Así las cosas, no basta con el proyecto establezca dentro de los elementos que debe contemplar el respectivo modelo de prevención y sanción, la existencia de procedimientos de denuncia, sino que se tiene que especificar que aquellos garanticen la privacidad e integridad de la víctima, exigiendo un estándar cualitativo a tales procesos, y no meramente formales, como lo hace el texto en debate. Asimismo, tampoco es suficiente que se señale la necesidad de que el referido modelo de prevención y sanción contenga un proceso para perseguir responsabilidades pecuniarias en

contra de quienes lo incumplan, sino que estas medidas deben garantizar una actividad eficaz en dicho sentido.

5. Intercálese entre el actual inciso sexto y séptimo del artículo 3° del proyecto, el cual pasará a ser inciso octavo, un nuevo inciso sexto del siguiente tenor: “El modelo de prevención y sanciones establecido en este artículo para ser válido, deberá ser certificado por la autoridad competente conforme el procedimiento que establezca el reglamento que se dicte para tal efecto.”

Fundamento.

No basta con el que Universidades, Centros Formación Técnica o Institutos profesionales, Escuelas Matrices o de formación de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública elaboren un modelo de prevención y de sanción de acoso sexual en el ámbito académico, ya que resulta necesario que exista un control formal y sustantivo sobre su contenido, a fin de otorgar garantías acerca de la seriedad, consistencia y efectividad de sus disposiciones. Por lo anterior, resulta imprescindible que dicho modelo sea objeto de un análisis y certificación por parte de la autoridad competente para regular a estas entidades. Lo anterior, además exige que se entregue la facultad para dictar un reglamento que defina el procedimiento para solicitar y obtener dicha certificación, sin la cual el modelo de prevención y sanción se transformará en un simple requisito vacío, con lo que toda la normativa sobre esta materia perdería sentido efectivo. Cabe señalar que lo señalado no es nada nuevo en nuestra legislación, donde las empresas deben someter a una certificación sus modelos de prevención de delitos conforme lo establecido en la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si dicho principio opera actualmente para una entidad que se dedica a un giro mercantil, con mayor razón debe ser aplicable a los modelos de prevención y

sanción de acoso sexual en el ámbito académico por organizaciones que se dedican a impartir educación.

6. En el artículo 5º del proyecto, intercálese entre las expresiones “modelo de prevención” y “no podrán” la siguiente palabra: “certificado”.

Fundamento.

El proyecto establece que las instituciones educacionales señaladas en esta ley que no tengan un modelo de prevención, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional que previste la Ley N° 20.129, la cual establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Un modelo de prevención que sólo tenga las menciones indicadas en el proyecto, pero que no haya sido certificado en cuanto a su consistencia, obviamente no puede dar pie para el otorgamiento de ningún tipo de acreditación estatal.